

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00305-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980 en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A**

**ANTECEDENTES**

A través de apoderado judicial la ciudadana **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980 interpuso acción de tutela contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A** por considerar que se le están vulnerando los derechos fundamentales al **MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA.**

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Refiere que la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** nació el día 11 de junio de 1963, por lo que actualmente cuenta con 57 años de edad.

Que desde el 12 de diciembre de 1983 la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** fue afiliada al régimen en pensiones al Instituto de Seguros Sociales ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y de acuerdo al reporte de semanas cotizadas en pensiones cumplió con el total de semanas cotizadas requeridas (1300) a cotizar un total de 1422 semanas.

Señala que para el año 2019, la historia laboral de la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA**, sufrió una modificación realizada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, reduciéndola a un total de 1.146 semanas, por lo que se elevó solicitud y el día 06 de junio de 2019 radicado BZ2019\_6380625\_1403781 – Colpensiones, informa que los ciclos 200406, 200411 a 200503, 200508 a 200511, 200602 a 200701 y 200703 a 200712 no correspondían a Colpensiones y serían trasladados a la AFP Porvenir.

Manifiesta que el 28 de febrero de 2020, se elevó derecho de petición ante Colpensiones solicitándose la corrección de la historia laboral, al ser descontadas de forma unilateral semanas cotizadas y en respuesta del 12 de marzo de 2020 **COLPENSIONES** informa que

los ciclos 200204 hasta el 200612, 200703 hasta el 200712, fueron trasladados a otra AFP; situación que se presentó en los reportes solicitados por la peticionaria de fechas 24/01/2018, 12/03/2018 y 09/08/2018.

Que mediante nuevo derecho de petición presentado en el mes de junio de 2020, ante Colpensiones se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión vejez por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, esto es la edad de 57 años y más de 1300 semanas cotizadas en el régimen de prima media, sin embargo, la entidad accionada mediante Resolución SUB140828 del 01 de julio de 2020, negó la pensión vejez por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, esto es el mínimo de semanas cotizadas.

Refiere que el 10 de julio de 2020, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución SUB140828 indicando que no se puede cargar al cotizante la obligación de hacer el traslado de las cotizaciones que unilateralmente Colpensiones realizó a la Sociedad Porvenir S.A y por lo tanto se debe realizar el reconocimiento de la prestación por cumplir con los requisitos establecidos por la ley; y por medio de la Resolución SUB 177592 del 20 de agosto de 2020, negó el recurso de reposición y confirmó la Resolución SUB140828, por las mismas razones que negó el reconocimiento de la prestación.

Indica que teniendo en cuenta que la peticionaria nunca realizó cambio de régimen o de fondo de pensiones, tal como lo refleja la historia laboral emitida por Colpensiones y el mismo reporte RUAF, se desconoce las razones de hecho y de derecho en las cuales **COLPENSIONES** fundó la decisión de descontar semanas efectivamente cotizadas por su mandante, afectando los requisitos para el reconocimiento de la pensión vejez cuyos requisitos de tiempo de cotización y de edad ya se encuentran cumplidos.

Que la accionante no recibe ningún otro tipo de ingreso teniendo en cuenta que realizó su retiro laboral desde el año 2016, debido a quebrantos de salud y su compañero permanente José Miguel Penagos Beltrán, tiene 60 años, se encuentra desempleado a causa de la crisis económica causada por la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional.

Refiere que la señora **EDELMIRA AVILA AVILA** se encontraba afiliada al sistema de salud como beneficiaria de su compañero permanente en la EPS FAMISANAR, sin embargo, por la pérdida de empleo del cotizante dicho servicio se encuentra actualmente suspendido.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales al **MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA** de la accionante, y se ordene a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A** el reconocimiento y pago de los derechos pensionales, por cumplir con los requisitos establecidos en la ley 797 de 2003.

## PRUEBAS

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

- Poder
- Copia simple de la cedula de ciudadanía de la señora Edelmira Avila Avila

- Formulario Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- Escrito derecho de petición
- Afiliación Persona – Consulta RUAF
- Reporte de semanas cotizadas en pensiones
- Oficio BZ2019\_2244045\_0509008
- Oficio SEM2019-055274
- Escrito radicado a Colpensiones con fecha 08 de mayo de 2019.
- Oficio BZ2019-6380625-1403781 del 06 de junio de 2019.
- Formulario solicitud corrección de historia laboral.
- Escrito derecho de petición.
- Oficio SEM 2020-053029.
- Formulario Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- Formato solicitud de prestaciones económicas.
- Escrito derecho de petición de reconocimiento pensión de vejez.
- Resolución No. SUB 140828 del 01 de julio de 2020.
- Formulario autorización o revocatoria – Notificación por correo electrónico.
- Declaración de no pensión.
- Formato información EPS.
- Formato solicitud de prestaciones económicas.
- Escrito de recurso de reposición Resolución SUB 140828 del 01 de julio de 2020.
- Resolución No. SUB 177592 del 20 de agosto de 2020.
- Certificación expedida por la EPS FAMISANAR
- Liquidación definitiva contrato de trabajo.
- Factura de servicios públicos.
- Certificado de existencia y representación legal Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
- La entidad accionada Porvenir S.A**
- Certificado de egresados.

## **ACTUACIÓN PROCESAL**

- 1.- Admitida la tutela el 14 de septiembre de 2020, se ordenó la notificación **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A**, para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.
- 2.- El 15 de septiembre de 2020, se notificó a través del correo institucional del Juzgado **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.
- 3.- Dentro del término legal conferido allego contestación la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A**.

**CONTESTACIÓN ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

La accionada refirió: “(...) consultadas las bases de datos de Colpensiones, se evidencio que el día 17/06/2020 bajo el radicado No. 2020\_5854443, la señora EDELMIRA AVILA AVILA solicito el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a su favor.

Frente a la petición anterior, Colpensiones expidió la Resolución SUB 140828 del 01 de julio de 2020, emitida por la Subdirección de Prestaciones Económicas en la que se decidió negar el reconocimiento y pago de la prestación deprecada de conformidad con las siguientes consideraciones:

La interesada acredita un total de 7,999 días laborados, correspondientes a 1,142 semanas.

(...) la peticionaria no logra acreditar el requisito mínimo de semanas cotizadas (1,300) teniendo en cuenta que en la actualidad tiene 1,142; razones por las cuales se niega la prestación solicitada.

Ahora bien, en atención a que la señora EDELMIRA AVILA AVILA considera que existen tiempos que no están incluidos en su historia laboral, se hace necesario realizar las siguientes precisiones:

Ciclo (s) 200203 hasta 200406, 200411 hasta 200503, 200508, 200511, 200602 hasta 200701, 200703 hasta 200712. se encuentra (n) acreditado (s) con el empleador que se evidencia en su historia laboral de acuerdo a la información reportada en su momento. Sin embargo; con respecto a los periodos que se reflejan con menos de 30 días, se informa que ello puede obedecer a alguna de las siguientes causas:

El empleador efectuó un pago inferior al correspondiente.

El empleador omitió pago de Fondo de Solidaridad pensional.

El empleador efectuó el pago sin los intereses de mora correspondientes.

Ciclo (s) 200203 hasta 200406, 200411 hasta 200503, 200508, 200511, 200602 hasta 200701, 200703 hasta 200712.

Los ciclos solicitados fueron cancelados de forma errada en Colpensiones por su empleador, ya que, en dicho periodo de tiempo, usted se encontraba afiliado en una AFP, razón por la cual los aportes no corresponden a nuestra entidad. Por lo anterior, los pagos serán trasladados a la Administradora que corresponda y se formalizara con el proceso que se realiza en el Sistema de Seguridad Social a través de Asofondos. Es de señalar que los aportes serán trasladados bajo la normatividad consagrada en el Decreto 1161 de 1994”.

## **CONTESTACIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES-PORVENIR S.A.**

La accionada refirió: “(...) El señor EDELMIRA AVILA AVILA a la fecha de presentación de la presente acción constitucional se encuentra afiliada a COLPENSIONES en cuanto a régimen pensional de escogencia, en consonancia a lo anteriormente descrito es válido acotar que AFP PORVENIR, no se encuentra legitimada para manifestarse sobre el estudio de la prestación económica deprecada en plenario de la presente acción constitucional.

Ahora bien, los hechos demandados en vía de tutela tienen su origen en una presunta violación por parte de COLPENSIONES, al señor EDELMIRA AVILA AVILA por ausencia de reconocimiento pensional de vejez en favor de la accionante.

Es importante resaltar una vez más que a la fecha el señor EDELMIRA AVILA AVILA no ha radicado ante esta administradora solicitud alguna.

Ahora es preciso indicar a su Honorable despacho que a la fecha esta entidad no ha sido notificada de traslado alguno de semanas, más aun teniendo en cuenta que tal como se evidencia en certificado de egresados anexo, la totalidad de aportes y semanas fueron trasladadas con destino a COLPENSIONES, a la fecha de presentación de la presente acción constitucional la aquí afiliada no se encuentra en vigencia de PORVENIR, al haberse realizado el traslado efectivo al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones”.

## CONSIDERACIONES

### Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

### Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### Procedencia de la acción de tutela.

La ciudadana **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980 se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales **MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la*

*protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES** es una empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, encargada de resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pertenecientes y administrados por el Instituto de Seguros Sociales –ISS; por otra parte **ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES – PORVENIR**, es una administradora de fondos de pensiones de carácter privado al que estuvo afiliada la accionante, además de ser las entidades a quienes se le atribuye vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

#### **DERECHO FUNDAMENTAL SEGURIDAD SOCIAL**

“El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”. (Sentencia T-043/2019).

#### **DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL**

El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".(Sentencia T-678/17)

#### **DERECHO AL DEBIDO PROCESO.**

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también en todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos<sup>116</sup>, de manera que se garantice (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados.(Sentencia T-543/17).

## **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.**

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

*“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.*

*El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).*

*La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.*

*Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).*

*El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a*

*su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.*

*Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.*

## **DEL CASO EN CONCRETO**

Corresponde a esta Juzgadora determinar si en la presente acción de tutela la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES- PORVENIR S.A** se encuentran vulnerando los derechos fundamentales la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980, al haber negado el reconocimiento y pago de la pensión vejez, toda vez que se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003.

Junto con el escrito de tutela se arrió copia de la cedula de ciudadanía de la señora EDELMIRA AVILA AVILA, registrando como fecha de nacimiento 11 de junio de 1963, por lo que se concluye que a la fecha la accionante cuenta con 57 años de edad.

Oficio SEM 2019-055274 con fecha 26 de febrero de 2019, del que se lee:

“Ciclo(s) 200509 hasta 200510, 201106, 201303, 201312

Se encuentra (n) acreditado (s) con el empleador que se evidencia en su historia laboral de acuerdo a la información reportada en su momento. Sin embargo; con respecto a los periodos que se reflejan con menos de 30 días, se informa que ello puede obedecer a alguna de las siguientes causas:

El empleador efectuó un pago inferior al correspondiente.

El empleador omitió pago de Fondo de Solidaridad pensional.

El empleador efectuó el pago sin los intereses de mora correspondientes.

Ciclo (s) 200203 hasta 200406, 200411 hasta 200503, 200508, 200511, 200602 hasta 200701, 200703 hasta 200712.

Los ciclos solicitados fueron cancelados de forma errada en Colpensiones por su empleador, ya que en dicho periodo de tiempo, usted se encontraba afiliado en una AFP, razón por la cual los aportes no corresponden a nuestra entidad. Por lo anterior, los pagos serán trasladados a la Administradora que corresponda y se formalizara con el proceso que se realiza en el Sistema de Seguridad Social a través de Asofondos. Es de señalar que los aportes serán trasladados bajo la normatividad consagrada en el Decreto 1161 de 1994”.

Oficio BZ2019\_6380625-1403781 del 06 de junio de 2019, indicándole: “ (...) en respuesta a su solicitud según radicado BZ2019-224404, amablemente le comunicamos que los ciclos

200302 a 200406, 200411 a 200503, 200508 a 200511, 200602 a 200701 y 200703 a 200712 no corresponde a Colpensiones de acuerdo a la fecha de pago de estos, por lo cual será trasladados a la AFP Porvenir donde usted se encontraba afiliado en el momento de dichas cotizaciones para que posteriormente la AFP mencionada, realice el traslado del mismo tiempo. Lo anterior, se realiza con el fin de normalizar su historia de traslados que se formalizara con el proceso que se realiza en el sistema de seguridad social a través de Asofondos”.

Escrito de derecho de petición mediante el cual se manifiesta: “1. Se sirva informar y entregar copia del acto administrativo mediante el cual se realizó el traslado de afiliación de la señora EDELMIRA AVILA AVILA a la AFP para los ciclos 20023 hasta 200406, 200411 hasta 200503, 200508, 200511, 200602 hasta 200701, 200703 hasta 200712 que fueron pagados erradamente a Colpensiones de acuerdo a las respuestas entregadas y puestas en conocimiento de mi mandante. 2. Informar el estado del trámite del traslado de los aportes que fueron pagados a Colpensiones por parte del empleador, en los ciclos informados por la misma entidad y su reintegro a Colpensiones por medio de Asofondo.3. Informa por escrito, el trámite realizado para el traslado de fondo pensional y copia de la documentación aportada por Colpensiones para certificar las semanas cotizadas por la peticionaria.4. De haberse entregado las copias de dicha carpeta y/o expediente administrativo, allegar copia del acta de entrega de dicha documentación.5. Informar y anexar copia de las acciones de cobro sobre aquellas cotizaciones con menos de 30 días y que son responsabilidad en su pago por parte del empleador y el cobro a cargo de COLPENSIONES, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 100 de 1993.6. Realizar la corrección completa de la historia laboral de la señora EDELMIRA AVILA AVILA, en el cual se refleje el total de semanas cotizadas 1422 y que fueron incluidas en el reporte entregado por Colpensiones en el año 2016”.

Oficio SEM2020-053029 del 12 de marzo de 2020, del que se lee: “Ciclo(s) 200204 hasta 200612, 200703 hasta 200712

Los ciclos solicitados fueron cancelados de forma errada en Colpensiones por su empleador, ya que, en dicho periodo de tiempo, usted se encontraba afiliado en una AFP, razón por la cual los aportes no corresponden a nuestra entidad. Por lo anterior, los pagos serán trasladados a la Administradora que corresponda y se formalizara con el proceso que se realiza en el sistema de seguridad social a través de Asofondos. Es de señalar que los aportes serán trasladados bajo la normatividad consagrada en el Decreto 1161 de 1994”.

Escrito de derecho de petición, mediante el cual se solicita: “1. La entidad Colpensiones reconozca y pague la pensión de vejez de la que trata el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003; por cumplir con los requisitos de edad y cotización a la señora EDELMIRA AVILA AVILA”.

Obra, Resolución SUB 140828 del 01 de julio de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA VEJEZ - ORDINARIA” considerando: “ (...) la peticionaria no logra acreditar el requisito mínimo de semanas cotizadas (1,300), teniendo en cuenta que en la actualidad tiene 1,142 razón por la cual se niega la prestación solicitada” para resolver NEGAR la prestación solicitada.

Resolución SUB 177592 del 20 de agosto “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRAMITE DE PRETACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA VEJEZ- RECURSO DE REPOSICIÓN” resolviendo confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. SUB 1408 28 del 01 de julio de 2020.

Ahora bien, frente a la pretensión que se busca con la acción de tutela, esto es, “*reconocimiento y pago de la pensión vejez*” no accederá a la misma, atendiendo que el estudio de la prestación a la luz de la ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, señala como requisitos para acceder a ésta: “Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre, incrementándose a partir del 01 de enero del año 2014 la edad de las mujeres a cincuenta y siete (57) años y para los hombres a sesenta y dos (62) años. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo, incrementado a partir del 1 de enero de 2005 el número de semanas en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015”.

Actualmente, la peticionaria no logra acreditar el requisito mínimo de semanas cotizadas (1,300) teniendo en cuenta que en la actualidad cuenta con 1,142 semanas.

Además de lo anterior, este despacho Constitucional observa con claridad que la accionante no ha agotado la vía de acción ordinaria y cuando la tutelante cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, el mecanismo Constitucional es improcedente, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sobre los requisitos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

*“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátese de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.*

De lo anterior se establece, que no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, a pesar de señalarse en el escrito de tutela las condiciones económicas de la accionante no se arrió prueba documental que así lo acreditara, no es la accionante una sujeto de especial protección constitucional, ni por su edad o condición médica; así entonces la accionante deberá hacer uso de la vía legal ordinaria para darle solución a la controversia respecto de las inconformidades que alega, a fin de obtener el reconocimiento de la prestación económica, a la que considera tener derecho.

En consecuencia, este despacho Constitucional no advierte que se esté vulnerando el derecho a la seguridad social y mínimo vital, por lo tanto, se negará la acción constitucional.

No obstante lo anterior, y pese a no haberse invocado como vulnerado el derecho de petición, se evidencia que las actuaciones desplegadas por Colpensiones han sido contrarias a este derecho constitucionalmente protegido, se tiene que el profesional del derecho que representa a la accionante ha interpuesto diversos derechos de petición solicitando la corrección de la historia laboral de la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** y si bien se ha dado respuesta, estas no cumplen con los criterios que la Corte Constitucional ha establecido en la jurisprudencia, pues no es clara y de fondo.

Una petición no se considera debidamente tramitado con su recepción, ni tampoco con una respuesta laxa y abierta, pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta pronta que satisfaga plenamente sus deprecaciones, entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento, como lo ha reiterado la H. Corte Constitucional en Sentencia T-523/10 de la siguiente manera.

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado y negrilla por el Despacho).

En consecuencia y dando cumplimiento a lo dicho por la H. Corte Constitucional, y como quiera que, a la presentación de este Instrumento Constitucional, no se ha dado respuesta de fondo, clara y precisa al derecho de petición solicitado por la accionante, se considera que no se han satisfecho los requisitos jurisprudenciales establecidos para tal fin.

En eventos como el del caso bajo estudio, la Corte ha reconocido que la omisión de respuesta constituye una violación de este derecho fundamental, y que además da lugar a su protección mediante la acción de tutela, lo cual puede acarrear sanciones disciplinarias para el funcionario que negligentemente ha omitido cumplir con su deber. Así lo sostuvo esta Corporación en la sentencia T-242/93.

Lo anterior es palpable en los considerandos de la Resolución SUB 177592 de 20 de agosto de 2020 al mencionar: “ (...) Que esta subdirección mediante requerimiento interno No. 2020\_6819716 solicitó la corrección de la historia laboral de los ciclos 04/2002 hasta el 12/2006 y del 03/2007 hasta el 12/2007, ante lo cual la DIRECCION DE HISTORIA LABORAL emitió la siguiente respuesta: para dar respuesta a su solicitud, con respecto a los ciclos en la Historia laboral de la afiliada EDELMIRA AVILA AVILA con CC 51693980 se solicitó la recuperación de los ciclos mediante RI Bz 2020\_7638555, donde ya se entregó respuesta con número de Mantis y es “ En relación a su requerimiento se radicó Mantis 38557 a la AFP Porvenir solicitando la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12. Una vez los aportes sean devueltos por parte de la AFP se procederá a realizar el cargue y actualización de la HL del ciudadano, se realizará el respectivo seguimiento”

A su vez el requerimiento No. 2020\_7638555 tiene la siguiente respuesta:

“En relación a su requerimiento se radicó Mantis 38557 a la AFP Porvenir, solicitando la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12. Una vez los aportes sean devueltos por parte de la AFP se procederá a realizar el cargue y actualización de la HL del ciudadano, se realizará el respectivo seguimiento”.

Con la contestación de la demanda, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES refirió: “Ahora bien, se tiene que Colpensiones en aras de recuperar los aportes de la accionante por cuanto está afiliada a Colpensiones desde el año 2008, mediante requerimiento MANTIS No. 38557, solicito a la AFP PORVENIR S.A la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12, sin que, a la fecha, se tenga respuesta.

Así las cosas, hasta tanto, la AFP Porvenir SA., no realice la devolución de los aportes no se puede realizar el cargue y actualización de la historia laboral de la señora EDELMIRA AVILA AVILA”.

En virtud de lo anterior, se advierte que a la fecha no se ha procedido con la corrección de la historia laboral de la accionante, pese a la diligencia de la actora en realizar las peticiones ante la administración para que sean resueltas, pues interpuso derechos de petición, evidenciándose que su querer es la corrección de su historia laboral.

**En sentencia T 101/20 la Corte Constitucional indicó: “Responsabilidad de las administradoras de pensiones frente a la información consignada en la historia laboral de sus afiliados -reiteración de jurisprudencia.**

En cuanto a la función de la historia laboral, se recuerda que el sistema pensional de nuestro país requiere que para acceder a un derecho pensional se acredite un número de cotizaciones específico que figura en la historia laboral del afiliado que, además, indica tanto el monto, la relación contractual de la que se deriva, así como el periodo en el cual se hicieron dichos aportes. De esta manera, la historia laboral *“opera como un elemento de prueba definitivo que, a la vez que facilita el acceso del trabajador y de la entidad que administra sus aportes a la información clara, actual y completa sobre el estado de cumplimiento de los requisitos en virtud de los cuales el primero podría llegar a adquirir el estatus de pensionado, propicia el oportuno reconocimiento de la prestación económica y la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales que se protegen a través del mismo”*.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha advertido que adicional al valor probatorio que tiene la historia laboral respecto de los deberes de las administradoras frente al reconocimiento y pago de pensiones, está la naturaleza de la información que allí se consigna la cual, como ya se mencionó, incluye datos de identificación del afiliado, el monto de sus ingresos, su actividad. Es decir, datos sujetos a la legislación actual de tratamiento de bases de datos y archivos que incluyen información de este tipo.

Además de la responsabilidad de manejo de información que surge para las administradoras de fondos de pensiones, está aquella dirigida a la custodia, conservación y guarda de la información necesaria para, en el momento requerido, determinar si su afiliado cumple o no con los requisitos para acceder a una pensión, incluyendo los documentos físicos o magnéticos que soportan dicha información, de tal manera que la garantía del derecho pensional de una persona no puede verse comprometida por la presencia de inconsistencias

en su historia laboral, atribuibles a problemas operativos o administrativos en el manejo de esos documentos.

Más allá de la simple guarda o custodia de los documentos que soportan la historia laboral de sus afiliados, las administradoras de fondos de pensiones tienen el deber de organizar y sistematizar esos datos, por lo que esta Corporación ha concluido que ***“no es posible trasladarle a los afiliados las consecuencias negativas a los defectos que puedan derivarse de la infracción de ese deber. En ese sentido, los efectos de los errores operacionales en la administración de las historias laborales deben ser, por el contrario, asumidos por la entidad administradora, que cuenta con los medios y la infraestructura para gestionar los datos de las cotizaciones y sus soportes, para evitar su pérdida o deterioro e impedir que el afiliado sufra los efectos negativos que puedan derivarse de cualquiera de esas circunstancias”***.

En ese sentido, del valor probatorio que ostenta la historia laboral del afiliado surge para las administradoras de pensiones la responsabilidad de asegurar que su contenido sea fiable, es decir, que refleje la realidad laboral de un trabajador pues se trata de su esfuerzo económico por años dirigido a lograr una prestación pensional. Lo anterior permite concluir que es necesario que la información que se encuentra en la historia laboral de un afiliado ***“sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada. Tal es el sentido del principio de veracidad o calidad intrínseco al tratamiento de los datos a cuyo cargo se encuentran la administradora del régimen pensional de prima media y los fondos privados de pensiones”***.

En este punto vale advertir que se reseñó por parte de Colpensiones: “mediante requerimiento MANTIS No. 38557, solicito a la AFP PORVENIR S.A la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12, sin que, a la fecha, se tenga respuesta.

Así las cosas, hasta tanto, la AFP Porvenir SA., no realice la devolución de los aportes no se puede realizar el cargue y actualización de la historia laboral de la señora EDELMIRA AVILA AVILA”.

Y por su parte Porvenir, reseño: “Ahora es preciso indicar a su Honorable despacho que a la fecha esta entidad no ha sido notificada de traslado alguno de semanas”.

Por lo anterior, y en aras de salvaguardar el **DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y PETICIÓN** de la accionante se ordenará que la AFP **PORVENIR** conteste el requerimiento MANTIS No. 38557, mediante el cual se petitionó la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12, a efectos de que Colpensiones pueda cumplir con el deber de asegurar y velar por que la información consignada en la historia laboral sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada.

Por lo anterior y sin más consideraciones se tutelarán los derechos fundamentales **DEBIDO PROCESO Y PETICIÓN**, en consecuencia se ordenará a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** para que dentro del término de **DOS (02) MESES** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado por la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980, corrigiendo y/o actualizando si fuere del caso la historia laboral, para ello, deberá la **AFP PORVENIR** contestar el

requerimiento MANTIS No. 38557, mediante el cual se petitionó la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** NO TUTELAR los derechos fundamentales **MINIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA** de la ciudadana **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Tutelar el **DERECHO DE PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO** de la ciudadana **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Ordenar a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** para que dentro del término de **DOS (02) MESES** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado por la señora **EDELMIRA ÁVILA ÁVILA** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.693.980, corrigiendo y/o actualizando si fuere el caso la historia laboral, con la información suministrada por la AFP **PORVENIR**. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Ofíciense.**

**CUARTO:** Ordenar a la AFP **PORVENIR** contestar el requerimiento MANTIS No. 38557, mediante el cual se petitionó la actualización del archivo por traslado de régimen con el detallado de los periodos 2002/03 a 2007/12, con destino a Colpensiones. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Ofíciense.**

**QUINTO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**SEXTO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**SÉPTIMO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-  
SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**cadace31de435841beea960312224f3c4dabcd86d7cb48909f4c9d26565d6eca**

Documento generado en 24/09/2020 06:47:43 p.m.